

**C**UANDO hace ahora justamente doce meses, a la semana siguiente de las elecciones generales, escribíamos desde estas mismas páginas que el proceso democrático acababa de dar tres pasos atrás, ignorábamos en ese momento el derroche de razón que la evolución posterior de los acontecimientos iba a proporcionar a esta afirmación; que, por entonces, parecía exagerada a quienes ponían por encima de todo su irresponsable satisfacción y alegría por la derrota de las expectativas electorales de los socialistas. Porque el triple salto atrás de este año, en lo constitucional (desarrollo unilateral de las leyes orgánicas), en lo político (unidad de acción de Unión de Centro Democrático con Coalición Democrática) y en lo económico (plan gubernamental), es casi mortal para la consolidación y no digamos desarrollo de la democracia.

Si bien ya en el espacio de tiempo que media desde las elecciones constituyentes a las generales se habían sentado las bases de este global retroceso —incumplimiento de los Pactos de la Moncloa—, no era posible imaginar que el mecanismo involutivo iba a adquirir la velocidad y el ritmo que han cobrado durante estos doce tristes meses que separan a una de otra década. Las más negras previsiones y oscuros augurios han sido superados por una implacable realidad que nos muestra como un espejo hasta qué punto ha sido deformado el proceso democrático que se inició hace tres años. Y no está de más referirnos a estos reiteradamente violados pactos porque el esqueleto de toda esta grave involución política tiene la osamenta socio-económica.

La misma convocatoria electoral, más la forma en que se desarrolló la campaña electoral del Gobierno, dejaba entrever el futuro porque el recurso a las urnas equivalía a rechazar la propuesta de pacto político-económico de los comunistas, y el contenido publicitario gubernamental implicaba asimismo una negativa a negociar la crisis con los socialistas. En síntesis, el programa económico del palacio de la Moncloa, expresión concentrada de los grandes intereses económicos de la derecha, iba a ser impuesto unilateralmente sin la más mínima negociación con los afectados. Decisión que presuponia lógicamente crear las necesarias premisas políticas para poder efectuar esta operación económica con los menores costes posibles. Lo que inexorablemente conducía a poner en marcha una línea política tan unilateral como la unilateralidad de su contenido económico.

## A un año del primero de marzo

# LA PREPARACION POLITICA DE UNA SALIDA ECONOMICA

FERNANDO LOPEZ AGUDIN

### El montaje de una cobertura

Así, si observamos las principales medidas políticas del año transcurrido, es fácil constatar cómo todas, sin excepción alguna, han estado encaminadas a crear las condiciones más favorables para poder poner en marcha la salida económica de la derecha. Bien sea en el terreno constitucional, político o social, no ha habido un proyecto gubernamental que no haya girado en torno a favorecer el desarrollo de la salida que la derecha de nuestro país da a la grave crisis socio-económica que padecemos. Estatutos de Autonomía frenados o por frenar; Estatutos de Enseñanza o de los Trabajadores, Presupuesto del Estado, etc., no han tenido esencialmente más que un objetivo central: recuperar la tasa de plusvalía y favorecer el proceso de acumulación. No hay un solo sector de la derecha, dentro o fuera del partido en el Gobierno, que no haya subordinado sus específicos objetivos diferenciados a este objetivo común.

La única división de la derecha ha estribado en la forma de aplicarlo, pero no en el contenido de la aplicación. No ha habido ninguna capa o fracción de este bloque social que se haya enfrentado a este programa económico ni a las imprescindibles medidas políticas que lo acompañan, sino una diferencia de apreciación en cómo aplicar esta política económica. Para unos, UCD en esta política corre el riesgo de verse desbordada por Fraga; para otros, aun admitiendo el peligro, estiman conveniente correrlo, porque la izquierda, que pudiera ser corresponsabilizada, no tiene peso social y la que tiene peso social no quiere ser corresponsabilizada. Aparte que la corresponsabilización supondría unos costes políticos que alterarían esta salida; por ejemplo, en el terreno de la enseñanza, donde ya no podría estar subordinada a los intereses de los grandes monopolios, sin que se garantizase, además, la aceptación popular de estas coordinadas antipopulares. Este ha sido

el único dilema de la derecha, como se ha podido constatar muy bien, sobre todo a lo largo del último semestre.

Incluso las leyes en elaboración durante estos doce meses acentúan duramente esta tendencia involutiva: la ley básica de empleo, que reduce el alcance temporal y disminuye el contenido económico del seguro de desempleo; la Ley de Valoraciones, Impuesto de Sucesiones, Impuesto sobre el Valor Añadido que se configuran como una verdadera contrarreforma fiscal; la regulación de conflictos colectivos, que va a tentar frontalmente contra el derecho constitucional de la huelga, etc. Toda esta preparación política ya ha dado sus buenos dividendos a los sectores financieros, que, según los últimos estudios al respecto, forman el grupo dominante del mercado y que comparados con los europeos se multiplican por cuatro.

Suma de datos que hace explicable que hasta los dos partidos más genuinamente democráticos de la derecha —PNV y Convergencia Democrática— no han tenido más diferencia con UCD que la que se deriva de la práctica política centralista de sus colegas madrileños. Es decir, ni los sectores más avanzados de la derecha periférica —históricamente representantes de los sectores más modernos y dinámicos del sistema— han estado en contra de esta planificación económica de la derecha centralista. Al igual que los escasos residuos socialdemócratas que aún permanecen en Unión de Centro Democrático. La oposición a este programa sólo ha provenido de las dos fuerzas de la izquierda.

### Un rechazo global

Ello es lo que hace comprensible que la izquierda haya clamado en el más puro desierto. A pesar de que están reunidas todas las condiciones para que su discurso económico tuviese algún eco —la enorme moderación de su contenido sumada a una serie de datos políticos no

democráticos que inquietan igualmente a parte de la derecha—, la izquierda no ha encontrado padrinos ni para la estrategia económica del PSOE ni para el plan de solidaridad nacional del PCE. El rechazo es global aunque se han cuidado las formas con los socialistas y exagerado las malas maneras con los comunistas. El no es el mismo prácticamente.

Y la razón es que la derecha no ha querido ni podido dar las contrapartidas políticas o sociales que la izquierda pide para avalar un necesario plan de austeridad que haga frente a la crisis de forma concertada y democrática. Antes de que se iniciara este año involutivo se desahucaron las contrapartidas comunistas y en los últimos meses acaba de desestimarse las contrapartidas de los socialistas. Recientemente, un colectivo periodístico de derechas, "Publius", señalaba ("ABC", 29 de febrero) que "el PSOE de la moderación no tiene la valentía de decirle al país que si queremos disminuir el desempleo no sólo es necesaria la contención de rentas, sino la limitación de reivindicaciones sociales y la asignación de los escasos recursos a áreas productivas generadoras de empleo".

Aunque, muy probablemente, la dureza de este tipo de respuestas haya tenido algo que ver con la dispersión de estrategias políticas que ha caracterizado a lo que podría ser el punto de partida de una alternativa democrática. Mientras en estos doce meses, si ha habido un envoltorio político común de la derecha en torno al plan económico gubernamental no ha existido un ropaje unitario de la izquierda que pudiese dar calor a una perspectiva económica negociada entre todas las fuerzas políticas y sociales. Así, el PSOE, sin contar con el PCE, ha estado corriendo el riesgo de ser un juguete en manos de la derecha, y el PCE, sin contar con el PSOE, corriendo el riesgo de bunkerizarse a través de la actuación exclusiva en el movimiento obrero sin poder ofrecer salidas políticas. Esta ha sido la realidad de una izquierda a la que la crisis económica condena a entenderse si no quiere jugar una mala pasada a los intereses populares que representa. Y que si no transforma sus demonios familiares divisorios en factores de complementariedad, va a arrastrar con la enorme corresponsabilidad de que vayamos a pasarlo todos bastante mal. Porque la ejecución del programa económico gubernamental ha llevado y está llevando a un profundo descontento popular y a un aumento del desencanto ciudadano; en definitiva, a un deterioro considerable del sistema democrático. ■